

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

<i>Rit</i>	:	<i>I - 8 - 2023</i>
<i>Ruc</i>	:	<i>23-4-0451489-K</i>
<i>Procedimiento</i>	:	<i>Ordinario</i>
<i>Materia</i>	:	<i>Reclamación de multa Administrativa</i>
<i>Demandante</i>	:	<i>Servicios Integrales Adulto Mayor Limitada</i>
<i>Demandado</i>	:	<i>Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Oriente</i>

En Santiago, a veinte de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS, OIDOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en estos autos **Rit I - 8 - 2023**, comparece don Alejandro Antonio Cáriz Meller, abogado y mandatario judicial, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea N°2934, oficina 401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en representación de **Servicios Integrales Adulto Mayor Limitada**, persona jurídica de su denominación, en adelante, "Hogares Alemanes", con domicilio en calle Tupungato N°9730, Vitacura, Región Metropolitana de Santiago, en relación con el artículos 503 y siguientes, todos del Código del Trabajo, y demás normas aplicables, interpone reclamo judicial en contra de **Inspectora Comuna del Trabajo Santiago Oriente**, doña Gabriela Olave Rodríguez, o quien haga las veces de tal, ambos con domicilio en Avenida Vitacura N°3900, Vitacura, Región Metropolitana, fundado en que el día 10 de noviembre del año 2022 emitió la Resolución de Multa N°8515/22/26, mediante la cual impuso una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a \$2.434.120, solicitando desde ya que sea acogida la reclamación y se deje sin efecto la resolución singularizada junto con las multas aplicadas, con expresa condenación en costas.

Reseña que la resolución reclamada tiene como antecedentes una fiscalización realizada por la misma Inspección el día 27 de septiembre de 2022, cuya materia es exactamente la misma que la revisada en esta segunda ocasión. El procedimiento de fiscalización tuvo como folio el N°1322/2022/3941 y el objeto fue revisar el cumplimiento a la cláusula vigésimos segunda del



contrato colectivo suscrito y vigente desde el 13 de agosto de 2021 y con fecha 30 de septiembre de 2022, la autoridad comunicó mediante correo electrónico, que el procedimiento concluyó "sin la aplicación de multas administrativas", por lo que fue la propia autoridad la que declaró mediante una actuación válida que su representada no había incumplido ninguna obligación legal o contractual y, arguye, que al haber finalizado este proceso, la decisión de la autoridad se debe mantener y especialmente se debe tomar en cuenta que se ha consumado la triple identidad propia de la cosa juzgada, la que también es aplicable en materia administrativa, categoría jurídica vinculada con la coherencia en el actuar del ente fiscalizador y con otras instituciones que buscan dar certeza a las relaciones contractuales.

Agrega que con fecha 8 de noviembre de 2022 se realiza una segunda fiscalización, por la misma materia y por la misma Inspección, procedimiento cuyo folio fue el N°8515/22/26. La materia fiscalizada fue nuevamente la cláusula vigésima segunda del contrato colectivo suscrito y vigente desde el 13 de agosto de 2021, y a su juicio, en abierta contradicción con lo resuelto hace poco más de un mes, aplica una multa administrativa por 40 UTM, teniendo como enunciado de la infracción "NO CUMPLIR ESTIPULACIONES DE INSTRUMENTO COLECTIVO" respecto de un total de nueve trabajadores. El presupuesto fáctico habría sido "NO DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO CON SINDICATO N°1 DE TRABAJADORES [...] VIGENTE DESDE EL 01.09.2021 Y HASTA EL 31.08.2024, REFERENTE A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL (sic) VIGÉSIMO SEGUNDO DEL TÍTULO V "DE LAS PRESTACIONES DE AYUDALA (sic), DENOMINADO ESTIMULO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD MENSUAL".

Refiere que existe una contradicción evidente entre dos procesos administrativos, implementados por la misma Inspección y por la misma materia, pero con resultados diversos y contradictorios, sin que se hubiere anulado por alguna causal



legal lo resuelto en la primera gestión que desestimó la denuncia; y reclamada no ha dado cumplimiento a lo menos a dos principios básicos de cualquier procedimiento administrativo como lo son el principio conclusivo y el principio de imparcialidad, recogidos en los artículos 8° y 11 de la ley N°18.880.

Reseña que su representada es responsable del funcionamiento de un Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor (ELEAM), y con fecha 13 de agosto de 2021 se suscribió un contrato colectivo con el Sindicato de Trabajadores N°1 de la empresa, que casi en la totalidad de sus cláusulas provienen de a lo menos cuatro procesos de negociación anteriores; y la cláusula 22 cuyo cumplimiento se cuestiona proviene de procesos anteriores, siendo el anterior texto el del contrato colectivo suscrito el 11 de septiembre de 2018, mejorada por el vigente a la fecha.

Que dicha cláusula señala "La Empresa pagará un bono de asistencia y puntualidad mensual ascendente a \$15.000 (quince mil pesos) a cada trabajador que tenga un 100% de asistencia efectiva en el mes de cálculo de remuneraciones respectivo y una puntualidad con margen de retraso promedio mensual de 5 minutos en relación con la hora de ingreso. Las partes declaran que el cálculo de este bono considera los periodos que la empresa usa para el cálculo de las remuneraciones.

Alega que sostener que se puede devengar el monto de esta cláusula sin que se haya prestado servicios o por estar suspendido el contrato individual, implica entrar a un terreno de interpretación contractual que forma parte del ámbito exclusivo y excluyente de un tribunal de justicia, pero en ningún caso lo puede hacer una autoridad administrativa sin que con ello invada una esfera de competencia que no tiene y sin que desatienda el mandato de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República; y la sanción aplicada solamente puede tener sustento si los trabajadores de la nómina hubieran asistido el 100% de los



días del mes y hubieran cumplido con la puntualidad acordada en igual periodo, en cada una de las épocas que se detalla en la resolución de multa. Únicamente en este contexto el fiscalizador podría encontrarse dentro de la esfera de competencia.

Agrega que el acta que los trabajadores “no registran asistencias ni atrasos”, debiendo entender que ello sería en los meses revisados. Pues bien, todos esos trabajadores sí registran ausencias y atrasos en los periodos revisados, tal y como también lo registraban los trabajadores de la primera fiscalización. A partir de este hecho cierto, el resultado debió ser exactamente el mismo que para la primera fiscalización, esta es, no se detecta infracción.

Asimismo alega que el sancionador ha invadido un ámbito reservado exclusivamente a las partes y a los Tribunales de Justicia, ya que son estos los únicos con la competencia legal para calificar relaciones jurídicas, interpretar la ley o los contratos de manera particular, y muy especialmente resolver los conflictos de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada, siendo relevante recordar la norma del artículo 76 de nuestra Carta Fundamental, que consagra la función jurisdiccional como atributo exclusivo y excluyente de los Tribunales establecidos por ley.

Asimismo, refiera que la resolución no contiene una descripción precisa y circunstanciada de los hechos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 11 de la ley N°19.880 que obliga a que los “hechos y fundamento de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y afirma que el texto de la resolución no contiene una descripción de hechos, sino que una transcripción de la norma que dice se incumplió. La ausencia de hechos hace que la resolución carezca de



fundamentación desde, cuestión que resulta contraria al inciso primero del artículo 16 y al inciso cuarto del artículo 41, ambos de la ley N°19.880.

SEGUNDO: Que, atendida la cuantía del reclamo, la presente causa se sustanció de acuerdo a las normas del Procedimiento Monitorio contemplado en el Párrafo 7° del Capítulo II, Libro V del Código del Trabajo.

TERCERO: Que, la reclamada en audiencia única contesta y solicita su rechazo con costas, y señala que la multa tiene su origen en un procedimiento de fiscalización llevado a cabo por denuncia del Sindicato de trabajadores, el cual se inicia con fecha 8 de noviembre de 2022, levantándose acta de requerimiento de documentación.

De acuerdo a los hechos constatados y muestra de trabajadores, la cláusula 17° título tercero sobre remuneraciones, del contrato colectivo vigente, que dice relación con estímulo de asistencia y puntualidad mensual, el cual no se estaría pagando.

Afirma que no hay vulneración a los principios reclamados ni cosa juzgada, ya que los trabajadores reclamaron que en la primera fiscalización no se revisó bien la documentación; sin que exista vulneración a normas constitucionales, ya que se constataron hechos concretos. Cita jurisprudencia y demás argumentos de hecho y derecho, constan íntegramente en audio.

CUARTO: Que, en audiencia se hace el llamado a conciliación, la cual no se produce por no tener la reclamada las facultades para tal cometido, teniéndose frustrado el llamado para todos los efectos legales y, por lo tanto, se recibe la causa a prueba. Ambas partes incorporaron prueba documental.

Se fijó como hecho no controvertido, que con fecha 10 de noviembre del año 2022 se dictó resolución de multa N°8515/22/26 donde se cursó multa por no cumplir estipulaciones de instrumento colectivo estimándose infringida el artículo 326 inciso segundo en



relación del artículo 506 del Código del Trabajo, cursándose una multa de 40 UTM.

Se fijaron los siguientes hechos a probar: 1) Hechos y circunstancias de la infracción que da origen a la multa reclamada y los pormenores de ella; 2) Efectividad que respecto de la multa impugnada opera acción de cosa juzgada al haber sido objeto de otra fiscalización con el mismo objeto causa de pedir, pormenores; y 3) Efectividad que la parte reclamante ha dado integro cumplimiento a las disposiciones legales cuyas infracciones motivaron la sanción.

QUINTO: Que, el reclamante, incorporó la siguiente prueba documental:

Documental:

1) Acta de notificación de inicio de fiscalización N°3941 de 27 de Septiembre de 2022 entregada por el fiscalizador señor Pedro Donoso Campos.

2) Set de 2 hojas en PDF con correos electrónicos de 30 de septiembre de 2022, mediante el cual la reclamada informó el término de la fiscalización 133/22/2022/3941 sin aplicación de multas administrativas.

3) Acta de notificación de inicio de fiscalización N°4688 de 8 de noviembre de 222 entregada por la fiscalizadora señora Cynthia Osés Donoso.

4) Set de 7 páginas en PDF con informe de notificación y Resolución de Multa N°8515/22/26, de 10 de noviembre de 2022.

5) Contrato colectivo de 13 de agosto de 2021, con recepción de la reclamada, suscrito entre la reclamante y el Sindicato de Trabajadores N°1 de la empresa reclamante.

6) Set de 2 hojas en PDF con el correo electrónico de 19 de diciembre de 2022, adjunto la resolución de multa reclamada, la cual se entiende notificada el 22 de diciembre de ese año.



7) Set de 13 hojas con el contrato colectivo de 11 de septiembre de 2018 suscrito entre la reclamante y el Sindicato de Trabajadores N°1 de la empresa reclamante.

Exhibición de documentos: La parte reclamada exhibe a la reclamante los siguientes documentos solicitados:

1. Expediente administrativo, con todos los antecedentes que lo componen, incluyendo la decisión final, de la fiscalización N°1322/2022/3941 del mes de septiembre de 2022. (cumplido)

2. Expediente administrativo, con todos los antecedentes que lo componen, incluyendo la decisión final, de la fiscalización N°8515/22/26 del mes de noviembre de 2022. (cumplido)

SEXTO: Que, la reclamada incorporó los siguientes documentos:

1) Copia Carátula de Informe de Fiscalización N°1322/2022/4688.

2) Copia Informe de Exposición N°1322/2022/4688.

3) Copia Activación de fiscalización N°1322/2022/4688 de fecha 07 de Noviembre de 2022, interpuesto por Sindicato N°°1 de Trabajadores de Empresa Servicios Integrales Adulto Mayor S.A;

4) Copia de Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización, denominado Formulario FI-1, de fecha 08 de 11 de noviembre de 2022.

5) Copia del Formulario denominado "Antecedentes verificados en la fiscalización, FI2, N°1322/2022/4688

6) Copia "Acta de notificación de requerimiento de documentación y citación" FI-4, de fecha 08 de noviembre de 2022.

7) Nómina del Personal Sindicalizado a Octubre de 2022; 105 socios.

8) Liquidaciones de remuneración aportadas en el procedimiento de fiscalización

9) Registros de asistencia aportados en el procedimiento de fiscalización.



10) Correo electrónico remite informe de fiscalización y notificación de resolución de multa enviado con fecha 19 de diciembre de 2022.

11) Resolución de Multa N°8515/2022/26 de fecha 10 de noviembre de 2022.

SEPTIMO: Que, conforme lo dispone el artículo 456 del Código del Trabajo, el Juez debe apreciar la prueba rendida en la audiencia de juicio conforme a las reglas de la sana crítica; Y, al hacerlo, deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

OCTAVO: Que de acuerdo al artículo 23 del DFL 2 y artículo 503 del Código del Trabajo, esto es que los inspectores del trabajo tienen el carácter de ministros de fe y, sus constataciones gozan de presunción legal de veracidad, por tanto, la reclamante es quien tiene la carga procesal, de acuerdo al artículo 1698 del Código Civil, de desvirtuar dicha presunción legal.

NOVENO: Que, uno de los aspectos discutidos en autos, es que existieron dos fiscalizaciones, la primera fiscalización 133/22/2022/3941 sin aplicación de multas administrativas y la segunda, por la cual se recurre en autos Resolución de Multa N°8515/22/26, de 10 de noviembre de 2022, en el cual si se cursó multa, ambos procesos dicen relación con denuncia realizada por sindicato N° 1 de trabajadores de Empresa Servicios Integrales del Adulto Mayor Ltda, por no cumplir las estipulaciones del contrato colectivo vigente.



Según se advierte de la página 8 del expediente de fiscalización, que consta a folio 30 de los presentes autos, la resolución se multa tiene su origen en denuncia realizada por el Sindicato, donde además formula queja en contra del proceso de fiscalización anterior, que resulto sin multa, además de haber incurrido en errores el fiscalizador actuante en razón del principio de bilateralidad (respecto de las preguntas formuladas) y domicilio de la denunciada, y solo en virtud de ello, comienza un nuevo proceso de fiscalización ante el reclamo de la organización sindical, y es en virtud de ello que la reclamante alega cosa juzgada.

La acción de cosa juzgada, confiere al litigante, en cuyo favor se ha declarado un derecho en una resolución judicial firme o ejecutoriada, el derecho a exigir el cumplimiento de lo resuelto.

Asimismo, debe concurrir la triple identidad, identidad legal de personas; identidad de la cosa pedida; y la identidad de la causa de pedir, es decir, el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, requisitos que, deben concurrir además de ser una sentencia definitiva o interlocutoria, las cuales deben estar firmes o ejecutoriadas.

Es así, que se puede advertir de los dos procesos de fiscalización, con resultados disimiles, fueron por un mismo reclamo, la falta de cumplimiento del contrato colectivo, sin embargo se llegaron a conclusiones diversas, existiendo errores en el primer proceso inspectivo, que motivo un reclamo de la organización sindical denunciante, por tanto, no vislumbra esta sentenciadora como puede concurrir cosa juzgada, ya que existió una nueva denuncia, además de un reclamo, sin que la reclamada pueda excusarse de fiscalizar.

DÉCIMO: que, la reclamante expone que la reclamada se ha excedido en sus atribuciones, ya que ha realizado interpretación,



lo cual esta sólo reservado a Tribunales de Justicia, alegando infracción a lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Pues cabe precisar que según lo dispuesto en el artículo 1 del DFL 2 señala expresamente en el artículo 1°, que *"La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo.*

Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) *La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;*

b) *Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo;*

c) *La divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación laboral;*

d) *La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación, de acuerdo con las normas que los rigen, y*

e) *La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo."*

Es así que, para dar cumplimiento al mandato legal, especialmente fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente, debe revisar documentos laborales, revisar contratos individuales y colectivos para vislumbrar si existe o no infracción a la normativa legal vigente, de lo contrario, como podría cumplir con su misión o imperativo legal o como podría arribar a una conclusión, en el caso de marras, según las denuncias del sindicato, por tanto, no se advierte que la reclamada haya incurrido en infracción a las normas constitucionales señaladas ni menos, se haya extralimitado en sus funciones, además de haber cumplido y respetado, en todo el



proceso de fiscalización, el principio de bilateralidad, escuchando tanto a la reclamante y la organización sindical denunciante.

DÉCIMOPRIMERO: Que, según consta de la resolución de multa recurrida, se constató lo siguiente: "No dar cumplimiento al contrato colectivo con sindicato N° 1 de trabajadores de empresa Servicios Integrales Adulto Mayor Ltda vigente desde el 01.09.2021 y hasta el 31.08.2024, referente a las obligaciones contenidas en el vigésimo segundo del título v "de las prestaciones de ayuda, denominado "estímulo de asistencia y puntualidad mensual", identificado en los comprobantes de pago de remuneraciones como bono asistencia mensual respecto de los siguientes trabajadores y períodos: Patricia Acevedo Serrano, run 10793111-2, septiembre 2021; Johanna Bustamante Fritz, run 15162386 -7, mayo 2022; Roxana Espinoza Castro, run 13245990-8, octubre 2022; Andrea Garrido Quilodran, run 13696969-2, julio 2022; Shaina Iram, run 24897223 -8, septiembre 2021, marzo 2022, abril 2022, mayo 2022, junio 2022, julio 2022, agosto 2022, septiembre 2022, octubre 2022; Luz Peña Carranza, run 11800099-4, febrero 2022, marzo 2022; Paola Rojas Cavieres, run 18114850-0 octubre 2021; Evelyn Silva Casanova, run 13804262-6 febrero 2022, marzo 2022, abril 2022, septiembre 2022, octubre 2022; Edith Zambrano Mora, run 22537072-9, noviembre 2021. habiendo constatado que en los periodos señalados no registran inasistencias ni atrasos, y en cumplimiento con pactado en el décimo séptimo del título iii "de las remuneraciones", la "compensación voluntaria" la empresa debe pagar los beneficios a quienes se encuentren haciendo uso de feriado legal o acogidos a licencia médica." Con ello se estimó como enunciado de la infracción "no cumplir estipulaciones del instrumento colectivo, estimando infringidos el artículo 326 inciso 2 en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo.



El contrato colectivo, en su cláusula vigésimo segunda, dispone el denominado TITULO V DE LAS PRESTACIONES DE AYUDA, SERVICIOS Y BENEFICIOS, "ESTÍMULO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD MENSUAL": La Empresa pagará un bono de asistencia y puntualidad mensual ascendente a \$15.000 (quince mil pesos) a cada trabajador que tenga un 100% de asistencia efectiva en el mes de cálculo de remuneraciones respectivo y una puntualidad con margen de retraso promedio mensual de 5 minutos en relación con la hora de ingreso. Las partes declaran que el cálculo de este bono considera los periodos que la empresa usa para el cálculo de las remuneraciones.

Sin embargo, previo a ello, en el título III, sobre Remuneraciones, la cláusula decimoséptima, se estipula una "COMPENSACIÓN VOLUNTARIA: La empresa pagará los beneficios afectos a este contrato que correspondan a los trabajadores que estén haciendo uso del feriado legal o acogidos a licencia médica por enfermedad licencias maternales o afectadas por accidentes de trabajo, como si estuvieren prestando servicios. En cuanto a los reajustes de remuneraciones durante el tiempo que el trabajador esté haciendo uso de licencia médica, por el hecho de operar un subsidio de salud, la empresa lo aplicará luego de terminado el reposo en la remuneración correspondiente".

Lo reclamado por el Sindicato de Trabajadores de la empresa Reclamante y la infracción constatada, es coherente con las cláusulas reseñadas, pues la cláusula décimo séptimo es clara en señalar *La empresa pagará los beneficios afectos a este contrato que correspondan, no indica que sean los beneficios estipulados en el título que se encuentra contemplada la cláusula, sino que se refiere al "contrato" como un todo, además, de señalar pagará los beneficios afectos a este contrato que correspondan a los trabajadores que estén haciendo uso del feriado legal o acogidos a licencia médica por enfermedad licencias maternales o afectadas por accidentes de trabajo, como si estuvieren prestando servicios;*



y lo señalado en la controvertida cláusula veintidós es un beneficio "ESTÍMULO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD MENSUAL": *La Empresa pagará un bono de asistencia y puntualidad mensual ascendente a \$15.000 (quince mil pesos) a cada trabajador que tenga un 100% de asistencia efectiva en el mes de cálculo de remuneraciones respectivo y una puntualidad con margen de retraso promedio mensual de 5 minutos...* tanto es así que está regulada en el Título V "DE LAS PRESTACIONES DE AYUDA, SERVICIOS Y BENEFICIOS", es decir, el bono de asistencia y puntualidad es un beneficio, el cual debe pagarse en caso de trabajadores con licencia, ya sea por enfermedad común, maternal o por accidente del trabajo, siendo ambas cláusulas en cuestionamiento, claras y simples en su redacción y comprensión.

DÉCILOSEGUNDO: Que, de acuerdo a los antecedentes, liquidaciones de remuneraciones y registros de asistencia que constan en el expediente de fiscalización a folio 30, 31, 32, 33 y 34, se vislumbra que efectivamente, a los trabajadores mencionados en la resolución de multa administrativa no percibieron el bono de asistencia y puntualidad, mientras hicieron uso de licencia y feriado legal, contraviniendo con ello lo estipulado por la empresa reclamante y el sindicato de trabajadores en convenio colectivo de fecha 13 de agosto de 2021 que se encuentra vigente y que no puede desconocer, por tanto, no cabe más que concluir que la resolución de multa no adolece de error de hecho y se encuentra ajustada a derecho.

DECIMOTERCERO: Que, cabe hacer especial mención que, la audiencia única, a petición de la reclamante, se realizó en dos sesiones, ya que solicitó la revisión con tiempo de los documentos digitalizados por la reclamada y que se encontraban en su minuta de prueba, lo cual dieron cumplimiento ambas parte en la primera sesión de audiencia única, esto es el 8 de febrero del año en curso, no obstante ello, la reclamante en segunda sesión pretendió



modificar dicha circunstancia, ofreciendo documental, testimonial y absolución de posiciones, lo cual no había solicitado en su presentación de folio 16, no obstante que la audiencia única ya había iniciado, por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 430 y 496 y siguientes del Código del Ramo, no se dio lugar, no obstante ello, no se vulnera derecho a defensa o debido proceso, ya que, lo reclamado en autos dice relación con hechos concretos y objetivos, que sólo se desprenden del contrato colectivo vigente, liquidaciones de remuneraciones y registro de asistencia, medios idóneos para dilucidar lo controvertido en autos, por ello, la declaración de testigos nada podría alterar al respecto.

DÉCIMOCUARTO: Que, toda la prueba documental pormenorizada y no analizada, en nada altera lo que ya ha sido resuelto por esta sentenciadora.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 9, 10, 326, 420 y siguientes, todos del Código del Trabajo, DFL 2; artículo 1698 del Código Civil, y artículos 175, 176, 177 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la reclamación de autos.

II.- Que, no se condena en costas a la reclamante, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese los autos en su oportunidad, y notifíquese a los apoderados de las partes vía correo electrónico tal y como fue señalado en audiencia de juicio para los efectos de lo dispuesto en el artículo 457 del Código del Trabajo.



Rit : I - 8 - 2022

Ruc : 23-4-0451489-K

Pronunciada por doña **CAROLINA ALEJANDRA BRAVO YÁÑEZ**, Jueza Titular y Destinada a este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veinte de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.



XSLHXEWNMPH